

## **LA CONSTRUCCION DEL ESTADO NACIONAL I. (1862-1880)**

*"...El liberal-nacionalismo se apoyó en el autonomismo provincial para acceder a la conducción del proceso de organización nacional. Supo blandir oportunamente tanto la bandera localista, como la nacional. Su triunfo,[...] no fue la imposición política de una clase económicamente predominante, sino el triunfo de una facción que -si bien se apoyaba en una clase social de gran capacidad expansiva en el terreno económico- halló la clave de su éxito en la posibilidad de tomar la bandera nacional e invocar en su favor la unidad de la nación, apoyándose al mismo tiempo en el poder que le confería su alianza con las fuerzas localistas de Buenos Aires. Pudo de este modo legitimar su política en nombre de la unidad nacional e imponerla en base a los recursos de la provincia de Buenos Aires.[...] De este modo el gobierno nacional, establecido en octubre de 1862, nació cautivo de las fuerzas políticas porteñas y dependiendo institucional y financieramente de la administración provincial...."*

OZSLAK OSCAR: La formación del estado argentino Buenos Aires, Ed.de Belgrano, 1982

-----

### **La fuerza de las armas**

Terminaba el año 1861. No había resultado fácil en el interior admitir el fracaso de la Confederación. La intervención armada fue necesaria en Santa Fe y en Córdoba durante el mes de noviembre y las fuerzas que respondían a Mitre no ahorraron sangre a su paso. En San Luis, Juan Saa abandonó el gobierno y pasó a Chile; en Corrientes una revolución depuso al gobernador Rolón. Ocupada Córdoba los ejércitos porteños avanzaron hacia el noroeste en una acción conjunta con las fuerzas de Santiago del Estero que derrocaron al gobernador de Tucumán. Finalmente en San Juan, en enero de 1862 asumió el gobierno Domingo Faustino Sarmiento sostenido por el ejército porteño. Desde La Rioja, el general Ángel Vicente Peñaloza "El Chacho", comandante militar de la Confederación para la región noroeste trató primero la vía diplomática y luego fue obligado a combatir. Encuentros esporádicos a los que seguían ejecuciones en el campo de batalla terminaron a mediados de 1862 con la firma de un convenio de paz entre Peñaloza y el gobierno provisional por la que el jefe riojano acató la autoridad y desmovilizó a su gente. La paz de la Banderita, sin embargo, no puso fin al hostigamiento permanente de los jefes del ejército porteño y los combates se multiplicaron al año siguiente para terminar con el fusilamiento del Chacho en noviembre de 1863. Dos criterios opuestos se adoptaron alternativamente en el noroeste. Sarmiento y algunos jefes militares consideraban que la guerra de exterminio era el curso de acción más apropiado para terminar con estos focos federales, reticentes a aceptar el proyecto de organización que imponía Buenos Aires. Otros jefes, entre ellos el general Paunero, reconocían que estos caudillos tenían un

alto poder de convocatoria entre el paisanaje y que se los podía ganar como elementos de control social. Asimismo era una realidad inocultable que estas poblaciones estaban atrapadas en una situación límite dado el grado de pobreza y atraso de la región. Se imponía la necesidad de acuerdos políticos pero también respuestas económicas concretas de parte del gobierno nacional. Civilización y barbarie no eran abstracciones. Se corporizaban en sectores populares faltos de recursos, mano de obra vacante por el progresivo deterioro de las economías tradicionales de subsistencia y en una burguesía intelectual y mercantil europeizante obsesionada con un único modelo de progreso posible, el que desde la teoría y la práctica le ofrecía el capital extranjero. La fuerza de las armas, en todo caso, venía a definir el monopolio de la violencia en favor de quienes podían tomar decisiones porque tenían el poder económico para determinar autoritariamente el camino a seguir.

### **Construir un estado nacional**

Cuando el 12 de octubre de 1862 el general Mitre asumió la presidencia constitucional, la ciudad Buenos Aires pasó a ser de hecho el centro administrativo del poder central, el punto de referencia -de aquí en más- para todas las decisiones políticas de cada uno de los rincones del país. Un país que abarcaba menos de la mitad del espacio actual y se reducía a un puñado de ciudades unidas por precarios caminos y dispersas en un contexto rural casi virgen en su paisaje, desafiante en sus distancias, complejo en sus particularidades regionales. Tanto Mitre como Urquiza habían dejado descontentos en sus respectivas filas partidarias. El presidente Mitre había logrado que el Congreso votara la federalización de Buenos Aires y ésto le costó la definitiva separación del ala más intransigente del partido liberal porteño. Atrincherada en la legislatura, se negó a ceder el territorio provincial y convino en votar una Ley de Compromiso, válida por cinco años, por la cual se admitía la residencia provisoria de las autoridades nacionales en la ciudad. Desde entonces este sector adoptó el nombre de autonomistas acorde con la defensa extrema de los derechos de la provincia dentro de los cuales no era menor el de mantener su integridad territorial. Consideraron a los mitristas complacientes con Urquiza, "...cocidos..." en las calderas del gobernador de Entre Ríos y por oposición se los llamó crudos o alsinistas, por reconocer el liderazgo de Adolfo Alsina, hijo del ex-gobernador del estado rebelde. Así las cosas, a partir de 1862 coexistieron en Buenos Aires las autoridades nacionales y las de la provincia hasta 1880 año en que se estableció definitivamente la jurisdicción nacional sobre el territorio de la ciudad portuaria. Urquiza siguió siendo la figura emblemática del federalismo provinciano pero su persistente actitud de respeto hacia las nuevas autoridades nacionales y su negativa a comprometerse en sublevaciones armadas le fueron restando presencia entre los últimos caudillos federales. Había triunfado el proyecto porteño pero debía hacerse efectiva la centralización del poder y esto suponía el reconocimiento de la autoridad presidencial

en todo el territorio y requería la creación del aparato institucional del estado. El nuevo pacto confederal se basaba en el reconocimiento de la constitución reformada pero debía traducirse, necesariamente, en la integración de las distintas entidades políticas regionales en una coalición estable con un principio de legitimidad aceptado por todos los actores políticos. Este proceso se abrió en 1862 con el liderazgo inicial del grupo político porteño que fue ensanchando sus bases sociales por la incorporación gradual de los sectores dirigentes del interior. El programa mitrista podía resumirse en el objetivo de lograr la unión nacional a través de la plena vigencia de la Constitución federal y de las libertades individuales que ella garantizaba; tender a la progresiva desaparición de los caudillos autocráticos y consolidar el libre juego de las instituciones como representantes naturales de la voluntad de los pueblos. Imponerlo a las provincias se tradujo en hechos de violencia y represión y en momentos de consenso y acuerdo en los que la fuerza dejó paso a la negociación. Un entramado de alianzas tejió entre 1862 y 1880 la urdimbre que permitiría construir una república posible en concordancia con el modelo alberdiano propuesto por la Constitución. Paralelamente, el estado como entidad jurídico política se fue apropiando de ámbitos de acción hasta entonces a cargo de las provincias. La delegación de ciertas funciones implicó la creación de nuevas instituciones estatales que asumían la concreción de tareas de interés general. Sin duda este avance se tradujo en la consolidación de un sentimiento de pertenencia a una instancia superior en la cual las distintas provincias se reconocían como partes de un todo y en esto también radicaba la idea de nación.

Crecimiento del estado y nacimiento de un régimen político constituyeron los procesos centrales a través de los cuales transitaron las presidencias fundadoras de la nacionalidad: la de Mitre (1862 –1868); la de Sarmiento (1868-1874) y la de Avellaneda (1874-1880).

### **Todo por hacer**

Dentro de una nueva concepción de progreso, la Constitución asignó al estado tareas de promoción de la industria, la inmigración y la colonización además de asegurar las condiciones de orden necesarias para atraer capitales externos. Era vital aprovechar al

máximo la coyuntura internacional para integrar al país en el circuito del mercado internacional de capitales. El orden interno pasó a ser un objetivo prioritario para alcanzar el progreso y el crecimiento y desarrollo del estado se justificó en la medida en que se lo

consideró el ámbito natural para concentrar los recursos necesarios y asumir las tareas asignadas. Oscar Ozslak ha realizado un rico análisis de esta etapa y clasificó las distintas modalidades adoptadas por el estado nacional en su avance sobre la sociedad civil y las

autonomías provinciales según cuatro aspectos relevantes: la organización y distribución de una fuerza militar unificada para prevenir y sofocar los numerosos intentos de alterar el orden interno, la captación de apoyos de los sectores dominantes del interior, la

localización y ejecución de obras y servicios indispensables al progreso económico y la creación y difusión de valores y símbolos que reforzaran el sentimiento de nacionalidad y consolidaran la legitimidad del poder central.

### **Paz y orden como requisitos indispensables**

Sobre la base del ejército de Buenos Aires distribuido en el territorio de la Confederación con el objetivo de controlar el acatamiento de las distintas regiones a la nueva situación planteada después de Pavón, el general Mitre encaró la tarea de hacerse reconocer como heredero natural de los poderes nacionales disueltos. La presencia militar ayudó a varios gobernadores indecisos a definirse y colaboró en el desplazamiento de los reticentes obteniéndose en corto tiempo la delegación de los poderes provisionales en el gobernador de Buenos Aires, luego electo presidente. Lógicamente estas fuerzas no fueron suficientes y tuvieron que asociarse a las milicias de las provincias ganadas para el proyecto liberal-nacionalista. Especialmente difícil se tornó la situación a partir de 1865 cuando a las necesidades de control interno se sumó la imperiosa tarea de organizar un ejército con una oficialidad adecuada para entrar en las operaciones que demandaba la Guerra de la Triple Alianza. Las levas se generalizaron en todo el territorio nacional y provocaron el rebrote de los focos federales en el interior. En Mendoza la revolución de los Colorados en noviembre de 1866 captó el apoyo de la zona cordillerana. Felipe Varela en La Rioja y Catamarca retomó las banderas de Peñaloza y sumó consignas de unión americana, en clara alusión a una guerra que consideraba fratricida. El presidente tuvo que retirar 3500 hombres del frente paraguayo y volvió a reprimir con la ayuda de las milicias santiagueñas. La acción concertada del ejército de línea y las tropas comandadas por Antonino Taboada sobre Varela, vencedoras en el Pozo de Vargas a principios de abril de 1867 pudieron poner fin a la rebelión interna. Esta acción represiva implicó la creciente gravitación de la institución militar en el proceso político. La presencia de los cuerpos de línea en los actos electorales condicionó no pocas veces los resultados de los comicios en aquellas provincias donde podían darse triunfos reñidos con las expectativas presidenciales. Así las cosas, la oficialidad del ejército también podía ser ganada para producir revoluciones al calor de resultados electorales adversos, y aún las milicias provinciales podían resultar un apoyo o un desafío para la autoridad presidencial. Recién en 1880 y a raíz de la revolución promovida por el gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor, se prohibió a los gobernadores movilizar las milicias con lo que se restó un último atributo importante a las autonomías provinciales.

### **Los orígenes de la coparticipación federal**

El lado represivo de las nuevas bases de dominación desde un centro de poder debía necesariamente complementarse con métodos de cooptación más sutiles que justificaran la incorporación de los sectores dirigentes provinciales, en función de logros tendientes a mejorar la situación económico financiera de la región. En esto estaba también involucrada la estabilidad institucional de las provincias. Si el discurso fundamentado en la idea de progreso movilizaba voluntades detrás del proyecto mitrista-liberal; en los hechos el progreso debía corporizarse en servicios y obras de infraestructura adecuadas al desarrollo de las fuerzas productivas regionales. El 1862 el presidente Mitre se vio en la necesidad de subsidiar los magros presupuestos provinciales y acordó dar a cada provincia la suma de mil pesos fuertes mensuales, cifra que en algunos casos debió complementar con auxilios financieros especiales. Luis Alberto Romero destaca la utilización del presupuesto nacional para financiar la extensión de servicios básicos en las provincias, fundamentalmente relacionados con la educación y la justicia. Correspondió a la gestión del presidente Mitre iniciar la reconstitución de la Corte Suprema de Justicia y la organización de los tribunales nacionales, organizar la Contaduría General de la Nación y la administración de Correos. En el orden de dotar de establecimientos escolares a las capitales de provincia se comenzó la fundación de colegios nacionales, tarea que durante la gestión de Sarmiento se extendió a la creación de las primeras escuelas normales para la formación docente. Fue una preocupación común a los tres mandatarios la modernización en las comunicaciones. Se mejoró el sistema postal; el telégrafo llegó a todas las provincias y pasó las fronteras hacia Chile, Brasil y Paraguay. La red ferroviaria se prolongó hasta Tucumán, y se proyectaron los tramos que unían Buenos Aires y Mendoza y el ramal trasandino. En estos emprendimientos fue fundamental la participación del estado como garante de una rentabilidad mínima a las empresas concesionarias y los contratos les acordaron generosos beneficios. Era prioritario promover la incorporación de algunas actividades productivas del interior al circuito dinamizador del mercado externo y esto se reflejó en el entramado radial de los ramales ferroviarios. Un análisis en términos políticos, no puede considerar aleatorio que el presidente Avellaneda dejara inaugurado el tramo ferroviario que unía Córdoba con su provincia natal y favoreciera de este modo los intereses de la burguesía tucumana comprometida con el desarrollo de la producción e industrialización de la caña de azúcar. El estado nacional asumía el compromiso de generar medios de comunicación, regulación y articulación social.

### **El proceso político: la nacionalización del liberalismo**

Durante los cuatro primeros años de su gestión presidencial Mitre contó con el apoyo incondicional del gobernador de Buenos Aires, Mariano Saavedra perteneciente al sector nacionalista del partido liberal. En 1866 Adolfo Alsina asumió la primera

magistratura

provincial y el partido autonomista pasó a tener una presencia fuerte en la legislatura y en los cargos políticos y administrativos de la ciudad y de la campaña bonaerense. La Guerra de la Triple Alianza se prolongaba más de lo previsto por el gobierno nacional y se

convertía en uno de los principales motivos de crítica por parte de la oposición. El ministro de Relaciones Exteriores, Rufino de Elizalde se fue convirtiendo en el blanco de los persistentes ataques de la prensa autonomista a través de las columnas del diario La

Tribuna editado por los hijos de Florencio Varela. Se iniciaba una década de lucha abierta y enconada entre los dos sectores del partido liberal. A lo largo de diez años automistas y nacionalistas medirían fuerzas en el terreno político provincial y tratarían de obtener ventajas en el contexto nacional. Posiciones irreconciliables desgastaron y dividieron las filas de las dos fracciones que fueron perdiendo protagonismo a la sombra de otras figuras políticas que se fueron perfilando como exponentes de una corriente de opinión representativa de las provincias. El liberalismo se nacionalizaba pero el partido mitrista ya no volvería a ganar elecciones nacionales.

### **Sarmiento... una elección reñida**

En 1867 comenzaron a perfilarse las candidaturas para la renovación presidencial. Surgieron cuatro candidatos con posibilidades de competir: el ministro Elizalde, el gobernador de Buenos Aires, Alsina, Urquiza y Sarmiento, por entonces embajador acreditado ante Estados Unidos. Sommariva definió con precisión las bases políticas de cada candidato: Sarmiento, sostenido por algunos jefes del ejército pero sin partido propio, significaba el equilibrio por ser ...porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires. Alsina contaba con el apoyo de los que después de Pavón combatieron a Mitre y personificaba el localismo porteño vigilando la opresión centralista de Buenos Aires. Elizalde tenía el apoyo del círculo más allegado a Mitre y representaba la continuación de su política interna y externa. Urquiza, reunía a los que desde antes de Pavón eran adversarios de Mitre y seguía siendo el mejor referente de los localismos interiores rebeldes a la hegemonía porteña. Podía triunfar el candidato que apoyara el presidente pero esto requería de una acción enérgica y continua en las provincias. Mitre, inmerso en el frente paraguayo poco podía hacer para disciplinar a su propio partido y apoyar la candidatura de su ministro. Por principios, el presidente optó por dar votos de prescindencia política que hizo manifiestos en una carta dirigida a José María Gutiérrez desde Tuyú-Cue. Sin embargo expresó su deseo de que el próximo presidente fuera probadamente liberal. Excluyó la candidatura de Urquiza por considerarla reaccionaria y la de Alsina, sin motivos claros. Dejó en pie la de Elizalde y la de Sarmiento y agregó la de su ministro del interior Guillermo Rawson. Sarmiento también jugó sus cartas y escribió al coronel Lucio V. Mansilla expresándole que de triunfar su nombre, el gobierno sería por primera vez la representación y el agente de la voluntad pública. Prosiguió el año con el interior convulsionado al calor de las posibilidades electorales de los candidatos. El general Arredondo trabajó a favor del sanjuanino en Córdoba y



La Rioja. Uno de los hermanos Varela entrevistó a Sarmiento en París y le ofreció los votos del autonomismo porteño. El 12 de abril de 1868 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. A juzgar por los resultados fue una verdadera contienda electoral y no es arriesgado afirmar que quizás hayan sido las elecciones más reñidas de la historia previa a la Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio. Hasta las vísperas de la reunión del Colegio electoral se hizo campaña en favor de una tercera alternativa: Urquiza-Alsina, pero los electores de la provincia de Buenos Aires se mantuvieron fieles a Sarmiento. El sanjuanino obtuvo además los votos de Córdoba, de las provincias cuyanas, de La Rioja y algunos de Jujuy; Urquiza los de Entre Ríos, Santa Fé y Salta; Elizalde sólo los de Santiago del Estero y Catamarca. Era evidente la pérdida de ascendiente político del mitrismo en el interior. Por su parte, Alsina podía sentirse satisfecho de haber desplazado al mitrismo de la fórmula presidencial y de seguir fortalecido en el contexto político de su provincia.

### **Autoridad y libertad, el difícil equilibrio**

Sarmiento pudo gobernar con independencia de quienes lo habían apoyado en la campaña electoral. Tuvo el buen tino de rodearse de las personalidades mejor ponderadas del autonomismo. Quizás el más cuestionado fue Mariano Varela, en Relaciones Exteriores, por su posición diplomática a la hora de capitalizar la victoria de las fuerzas aliadas en el Paraguay. Nicolás Avellaneda había sido su consejero epistolar durante la campaña y desde la cartera de Culto e Instrucción Pública cumplió como fiel discípulo con la tarea de dejar las provincias sembradas de escuelas. El general Gainza, aunque estaba alejado de la política militante partidaria fue convocado para el ministerio de Guerra y Marina. En el orden interno el presidente tuvo que ser muy cuidadoso con las fracciones liberales porteñas, comprometidas en una enconada lucha por el poder que se tradujo al final de la presidencia en los hechos armados de 1874. Fue también cauto en su relación con los federales y especialmente buscó un acercamiento con el general Urquiza a quien visitó personalmente en San José, el 3 de febrero de 1870 para recordar un nuevo aniversario de Caseros. Esta reconciliación agregaría un motivo más al descontento de algunos caudillos y militantes federales cercanos y aceleraría la rebelión entrerriana.

Combinar las libertades políticas con el principio de autoridad no era fácil en la Argentina de 1870. Sarmiento había sostenido a través de sus escritos los principios republicanos y muy especialmente la independencia de los tres poderes, de los cuales dedicó especial atención a la defensa del legislativo. Las circunstancias lo obligaron, sin embargo, a robustecer la autoridad presidencial, sin menoscabo del Congreso, pero con el uso contundente de todas las atribuciones que la Constitución ponía en manos del primer mandatario. Entre ellas fueron particularmente utilizadas las facultades de movilizar el ejército en el territorio nacional y de intervenir las provincias según el artículo sexto de la Constitución. Su habilidad política consistió en jugar libremente con la ambigüedad del texto constitucional. Intervino San Juan en defensa de la legislatura; pero no pudo

sostener la misma tesis en Entre Ríos cuando el cuerpo legislativo provincial respaldó en forma unánime la elección de Ricardo López Jordán a pesar de haber instigado el asalto al palacio San José que terminó con la vida del general Urquiza. En esta oportunidad la intervención a la provincia se resolvió por un decreto del poder ejecutivo y el ejército nacional fue inmediatamente movilizado. No fue fácil terminar con el movimiento jordanista. Contaba con bases políticas y apoyo en los sectores populares en Entre Ríos y en la provincia de Corrientes. Era el último representante de una estirpe que se extinguía, el caudillo federal, el producto de la barbarie y con ella el presidente no admitía concesiones. Al final de su mandato Sarmiento había controlado la situación en Entre Ríos y el noroeste se había librado de la tutela de los Taboada. Dejaba las provincias con gobernadores respetuosos de los poderes nacionales. Sin embargo la sombra de una crisis económica que había comenzado a sentirse en el comercio porteño y nuevamente la lucha enconada entre mitristas y alsinistas contribuyeron a impedir la normal sucesión presidencial.

### **Los orígenes del partido nacional**

En 1873 comenzaron a agitarse las posibles candidaturas. Tres quedaron como representativas del electorado. La de Mitre, levantada por el partido nacionalista a través del diario La Nación; la de Adolfo Alsina respaldada por el autonomismo porteño y la del ministro Nicolás Avellaneda. El programa de Mitre no difería del seguido en su primera presidencia y su grupo era la viva representación de la burguesía mercantil y la intelectualidad antirrosista. El partido de Alsina en cambio, había abierto sus filas a muchos elementos federales, algunos de antigua tradición rosista y había nucleado a jóvenes como Carlos Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Miguel Cané y Dardo Rocha que darían nuevo contenido al discurso autonomista. Proclamaban defender las autonomías provinciales y prometían promulgar una legislación clara sobre intervenciones federales, organizar definitivamente las milicias provinciales y limitar el derecho de veto presidencial. A diferencia de los nacionalistas, el autonomismo daba una imagen más popular por engrosar su contingente electoral con personajes de las orillas de la ciudad, más precisamente de la parroquia de Balvanera donde era difícil ganarle una elección a Leandro N. Alem. Pero era sólo la imagen, porque a los efectos de ganar elecciones en la ciudad, los mitristas también podían movilizar a los sectores populares. En el mes de septiembre un periódico de muy limitada tirada aparecía en Buenos Aires, La Unión Argentina. En su primer número fundamentaba la necesidad de crear un partido que representara "...en toda su extensión y su conjunto los verdaderos intereses de la Patria...", donde las provincias estuvieran representadas. Esta propuesta se corporizaba en la candidatura de Nicolás Avellaneda. El ministro renunciaba a su cargo en el gabinete y salía de campaña por el interior del país. Algunas provincias



volvieron a conmoverse. Tucumán, su provincia de origen y Córdoba, la de sus estudios universitarios, le dieron su apoyo a la hora de votar. El primero de febrero de 1874 se llevaron a cabo las elecciones para renovar la Cámara de diputados. A solo días de las elecciones presidenciales estos comicios se convirtieron en una encuesta previa para los candidatos. El nivel de lucha en los atrios de las parroquias porteñas y de los pueblos de la campaña bonaerense superó todo lo conocido hasta entonces. Tiroteos, asaltos a cuchillo y mesas dobles motivaron que tanto los alsinistas como los mitristas se consideraran vencedores. El autonomismo porteño había ganado en La Rioja y Catamarca; Avellaneda en las restantes. Sólo Santiago del Estero y San Juan votaron al partido de Mitre. El 15 de marzo Alsina renunció a su candidatura y puso los votos de su partido a disposición de Avellaneda, nació el Partido Autonomista Nacional y el tucumano completaba el segundo término de la fórmula con Mariano Acosta, liberal, autonomista y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las presidenciales de abril también adolecieron de fraude agravado en algunos casos por la rivalidad entre porteños y provincianos. En el Colegio electoral Avellaneda fue proclamado presidente con casi el doble de electores que Mitre. El acuerdo con el autonomismo pesó para que los candidatos alsinistas de febrero entraran en el Congreso. A los mitristas sólo les quedaba el camino de la revolución, para lo cual dejarían de lado su obsesivo respeto por las instituciones.

### **Doctores y militares...caudillos a su manera**

La revolución estalló el 24 de septiembre de 1874. De inmediato fue clausurado el diario La Nación y declarado el estado de sitio. El grueso de los sublevados, unos cinco mil hombres, se reunieron entre los regimientos al mando de la oficialidad mitrista y paisanos de la provincia de Buenos Aires como tropa privada de algunos hacendados nacionalistas a los que se unió el general Mitre y las huestes aborígenes de Cipriano Catriel. El general Arredondo en Cuyo y el general Rivas en el sur bonaerense midieron fuerzas con las tropas del gobierno. En medio de estos encuentros, en Buenos Aires asumía la presidencia Nicolás Avellaneda. La Verde y Santa Rosa fueron batallas definitorias. Esta última sería gloriosa para el coronel Roca porque ganaría el grado de general. A Mitre lo esperaba la cárcel de Luján. Al presidente Avellaneda una difícil gestión presidencial.

### **1876... un año crítico**

Por segunda vez el autonomismo porteño había desplazado al nacionalismo de la escena provincial y del contexto político nacional. El primer gabinete de Avellaneda se formó con mayoría de políticos provincianos. Alsina asumió el ministerio de Guerra y Marina y se convirtió en el verdadero sostén del presidente ante los embates de los nacionalistas quienes luego de ser amnistiados retornaron a las intrigas revolucionarias y se abstuvieron de participar en la lucha electoral. La situación

interna se complicó cuando los efectos de la crisis económica se hicieron sentir en las finanzas del gobierno. A la falta de divisas para cumplir con las obligaciones externas se sumó la lucha entre las dos instituciones bancarias: el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Nacional. La entidad provincial sostuvo una vez más el andamiaje financiero del país y el presidente Avellaneda recompuso el crédito en el exterior con un plan de estricto ahorro interno. La crisis motivó un replanteo de las posturas librecambistas y el grupo de jóvenes autonomistas adoptó cierto discurso de protección a la producción nacional. Hacia fin de año una nueva invasión de López Jordán conmovió el litoral pero fue rápidamente reprimida; sería la última hazaña del caudillo.

### **Porteños y provincianos,...el último combate**

A mediados de marzo de 1877 moría Rosas en el exilio y la Argentina abría el último capítulo de la lucha por la consolidación del estado nacional. Quedaba como asignatura pendiente fijar en forma definitiva la capital de la República. Durante la presidencia de Sarmiento el Congreso había sancionado una ley federalizando la ciudad de Rosario pero el veto presidencial había vuelto a postergar la solución. Avellaneda había incluido la cuestión entre sus objetivos de gobierno y compartía esta decisión con las fuerzas políticas que en las provincias habían apoyado su candidatura. Crecía en el interior el consenso sobre la definitiva federalización de la ciudad de Buenos Aires y se volvía a fundamentar en la necesidad de quitarle poder a la provincia hegemónica. Se acercaban las elecciones para renovar las autoridades bonaerenses y preocupaba al presidente la autoexclusión del partido de Mitre. La voluntad política de promover un acercamiento se manifestó en el levantamiento del estado de sitio y la reincorporación al ejército de los oficiales rebeldes del 74. Con la colaboración del gobernador de Buenos Aires Carlos Casares y José María Moreno, amigo del presidente y con vínculos en las filas mitristas Avellaneda logró la conciliación entre Mitre y Alsina. Los nacionalistas abandonaban su actitud conspirativa. Se formarían listas mixtas de candidatos para las elecciones de diputados nacionales y se acordaría un candidato a la gobernación. Al margen del entorno presidencial pero atentos a los conciliábulo políticos que tenían lugar en la capital porteña los gobernadores de algunas provincias estrechaban contactos para acordar nuevamente un candidato a la presidencia que los representara. En Buenos Aires la Conciliación produjo fisuras tanto en el partido mitrista como en el ya fracturado autonomismo, del cual se había desprendido el sector más joven para levantar la candidatura de Aristóbulo del Valle a la gobernación de la provincia. Este grupo se autodenominó partido Republicano y se expresó a través de las columnas de El Nacional. Detrás estaba Sarmiento apuntalando la oposición a lo que consideraba serían elecciones nulas y nocivas al sistema republicano. En varias provincias del interior los círculos locales que respondían al partido Nacional cerraron filas y

contribuyeron al fracaso de la Conciliación. En Buenos Aires, nacionalistas y autonomistas levantaron la candidatura de Carlos Tejedor para las elecciones de gobernador y el veterano político del estado rebelde ganó cómodamente una elección controlada por el aparato oficial. Días después falleció Adolfo Alsina. El vacío de poder que dejó, modificó sustancialmente el curso de los acontecimientos a partir de 1878. El general Roca asumió el ministerio de Guerra y Marina y dio un giro de ciento ochenta grados al proyecto de ocupación de la frontera. Su campaña al mal llamado "Desierto" lo catapultó al primer plano. En Buenos Aires candidatos conciliados ganaron las elecciones para diputados nacionales y las provinciales para la legislatura. Pasadas estas confrontaciones el partido Republicano se disolvió y Sarmiento trató sin éxito de reunificar el partido Autonomista. A fin de año se separaron los que respondían al gobernador Tejedor y buscaron unirse nuevamente a los mitristas. A principios de 1879 ambos partidos levantaron el nombre de este como candidato a la presidencia: Carlos Tejedor-Saturnino Laspiur fue la fórmula de los conciliados. En las provincias comenzó a agitarse el nombre de Roca como candidato opositor y aquellas más cercanas al ministro de Guerra comenzaron a sumar aliadas a su candidato. En algunas provincias revoluciones liberales pusieron en apuros al gobierno nacional y provocaron la renuncia de los ministros que habían sido nombrados con motivo de la Conciliación. Avellaneda conservó hasta las últimas consecuencias una actitud prescindente pero los acontecimientos lo superaron. Los argentinos volvían a dividirse pero en esta oportunidad el peso político de los porteños fue insuficiente para definir la situación a su favor. Detrás del triunfo de Roca en el interior se había gestado una Liga de gobernadores que lo sostenía al calor de una consigna, la federalización de Buenos Aires. Tejedor armó a los porteños y se sublevó contra la voluntad de las urnas y la autoridad nacional. El presidente, su gabinete y los legisladores nacionales que respondían a la Liga se trasladaron al pueblo de Belgrano y desde allí declararon cesantes a los diputados de la oposición. Este Congreso fue el que votó la Ley de federalización. En las calles de Buenos Aires el ejército nacional reprimió a las milicias del gobernador rebelde. La revolución del Ochenta fue dominada por la fuerza de las armas nacionales y por el respaldo de una nueva clase política formada al amparo de un estado nacional que se había consolidado. Pasados los combates e intervenida la provincia, el ya electo presidente Roca buscó recuperar el acuerdo y ofreció su apoyo a quienes quisieran avenirse a la nueva situación. Un trago amargo pero necesario según lo definieron algunos autonomistas cuando en la legislatura debieron votar la entrega de la ciudad a la jurisdicción federal. Sólo la voz y el voto de Leandro Alem desentonaron en el recinto el 26 de noviembre de 1880 cuando los porteños sancionaban la ley que entregaba el municipio de la ciudad a las autoridades nacionales.

María Cristina San Román

---